



**CUESTIONARIO TIPO TEST PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE TÉCNICO MEDIO,
SUBGRUPO DE CLASIFICACIÓN A2, PLAZA VACANTE F2110**

- 1. El título de la Constitución Española de 1978 que trata de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales es el:**
 - a) Cuarto
 - b) Quinto
 - c) Sexto

- 2. El número mínimo de Diputados previstos para el Congreso de los Diputados, según la Constitución Española de 1978, es de:**
 - a) 250
 - b) 300
 - c) 350

- 3. ¿De qué plazo dispone el Rey para sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales, según la Constitución Española de 1978?**
 - a) Quince días
 - b) Una semana
 - c) Un mes

- 4. La sesión constitutiva del Parlamento de Andalucía se celebra en el plazo de veinticinco días desde la:**
 - a) Disolución del anterior Parlamento de Andalucía.
 - b) Convocatoria de las elecciones
 - c) Celebración de las elecciones

- 5. ¿Qué título de la Constitución Española de 1978 versa sobre “la organización territorial del Estado”?**
 - a) El Título III
 - b) El Título VIII
 - c) El Título V

- 6. La cuestión de confianza a la que podrá ser sometido el Alcalde se puede vincular a:**
 - a) La aprobación o modificación de los Presupuestos anuales
 - b) La aprobación o modificación del Reglamento Orgánico.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas

- 7. Conforme dispone el artículo 86 de la Constitución Española de 1978, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de:**
 - a) Decretos-leyes
 - b) Decretos Legislativos
 - c) Reglamentos

8. **¿Quién puede obtener copias de documentos contenidos en un procedimiento que se esté tramitando?**
- a) Solo los interesados en el procedimiento
 - b) Cualquier ciudadano
 - c) Solo el órgano administrativo
9. **De acuerdo con el art. 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los Presupuestos que integran el Presupuesto General de la Corporación deberán aprobarse:**
- a) Separadamente de este
 - b) Con déficit equilibrado
 - c) Sin déficit inicial
10. **Los Presupuestos Generales de las Entidades Locales constituyen, de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo:**
- a) La expresión de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos.
 - b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos.
 - c) La expresión cifrada, general y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos.
11. **De acuerdo con el art. 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la Hacienda de las Entidades Locales estará constituida por los siguientes recursos:**
- a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado
 - b) Las subvenciones
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas
12. **De conformidad con lo dispuesto en el artículo 104 de la Constitución Española de 1978:**
- a) Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
 - b) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas para regular el estatuto de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
 - c) Mediante delegación legislativa se podrá delimitar con precisión el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, así como las peculiaridades del ejercicio del derecho a la sindicación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.
13. **Señale la respuesta correcta. Según el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en el procedimiento de aprobación de las Ordenanzas locales:**
- a) Aprobada inicialmente por el Pleno, la información pública y audiencia a los interesados se conferirá por el plazo mínimo de veinte días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
 - b) Se procederá a la resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y para su aprobación provisional por el Pleno.

- c) Aprobada inicialmente por el Pleno y sometida a información pública, en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
- 14. De acuerdo con el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, los servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo del personal funcionario, son un factor a tener en cuenta para determinar la cuantía y estructura de:**
- a) Las retribuciones complementarias.
 - b) Las pagas extraordinarias.
 - c) Las indemnizaciones por razón del servicio.
- 15. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos estará sujeta:**
- a) A los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, libertad sindical y transparencia.
 - b) A los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia.
 - c) A los principios de legalidad, capacidad representativa y de libre asociación, publicidad y transparencia.
- 16. Según lo establecido en el artículo 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, el descrédito para la imagen pública de la Administración es:**
- a) Una circunstancia a tener en cuenta para tipificar una falta disciplinaria como falta grave.
 - b) Es una falta muy grave.
 - c) Se configura como un incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
- 17. El Estado social y democrático de Derecho, en nuestra Constitución, propugna como valores superiores del su ordenamiento jurídico:**
- a) La legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
 - b) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político,
 - c) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas.
- 18. Según el artículo 10 de la Constitución, constituyen fundamento del orden político y de la paz social:**
- a) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
 - b) El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

- c) La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
- 19. Según establece el artículo diez de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, no podrá presentar quejas ante el Defensor del Pueblo:**
- a) Una persona menor de edad.
 - b) Una persona incapacitada legalmente.
 - c) Ninguna autoridad administrativa en asuntos de su competencia.
- 20. Señale la respuesta correcta. Conforme a lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución Española, el Tribunal de Cuentas:**
- a) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como del sector público.
 - b) Dependerá directamente del Gobierno y ejercerá sus funciones por delegación en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
 - c) Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por las Administraciones Públicas que adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
- 21. Señale la respuesta correcta. Según establece el artículo segundo de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado:**
- a) La consulta al Consejo será preceptiva cuando en esta o en otras leyes así se establezca, y facultativa en los demás casos.
 - b) Los dictámenes del Consejo serán vinculantes, salvo que la ley disponga lo contrario
 - c) Corresponderá en todo caso al Pleno del Consejo de Estado resolver en aquellos asuntos en que, siendo preceptiva la consulta al Consejo de Estado, el Ministro consultante disienta del parecer del Consejo.
- 22. Conforme a lo previsto en el artículo 55.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la organización central de la Administración General del Estado, son órganos superiores:**
- a) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Secretarios Generales
 - b) Los Ministros y los Secretarios de Estado.
 - c) Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Directores Generales
- 23. Señale la respuesta correcta. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, a los Subdelegados del Gobierno, entre otras, les corresponde:**
- a) Elevar al Gobierno, con carácter anual, a través del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios públicos estatales en el ámbito provincial.
 - b) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigirá las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia
 - c) Promoverá la celebración de convenios con la Comunidad Autónoma y con las Entidades Locales, en particular, en relación a los programas de financiación estatal, participando en el seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los mismos.

24. Conforme a lo dispuesto en el artículo 159 de la Constitución Española, los miembros del Tribunal Constitucional:

- a) Deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
- b) Deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Serán designados por un período de seis años y se renovarán por terceras partes cada tres.
- c) Deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, juristas de reconocida competencia con más de veinte años de ejercicio profesional. Serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

25. Conforme al artículo treinta y ocho de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:

- a) Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley obligan a la Administración a revisar de oficio los actos administrativos firmes en los que se haya hecho aplicación de la norma inconstitucional, sean o no de carácter sancionador.
- b) Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada y obligan a la Administración a revisar los actos administrativos firmes cualquiera que sea su objeto y fecha.
- c) Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

26. Las elecciones al Parlamento europeo se celebran cada:

- a) Seis años
- b) Cinco años
- c) Cuatro años

27. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ejerce las labores jurisdiccionales supremas en el sistema jurídico comunitario y tiene su sede en:

- a) Luxemburgo
- b) Bruselas
- c) Estrasburgo

28. Según el artículo 56.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de:

- a) Idoneidad, jerarquía y economía procedimental.
- b) Idoneidad, seguridad jurídica y conservación del acto administrativo.
- c) Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

- 29. Según el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo para formular alegaciones en el periodo de información pública:**
- a) En ningún caso podrá ser inferior a 10 días.
 - b) En ningún caso podrá ser inferior a 15 días.
 - c) En ningún caso podrá ser inferior a 20 días.
- 30. Conforme a lo previsto en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la lealtad institucional se configura como:**
- a) Deber de colaboración entre las Administraciones Públicas.
 - b) Deber de cooperación, asumen compromisos específicos en aras de una acción común
 - c) Principio de las relaciones interadministrativas.
- 31. Según lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las decisiones que adopte la Conferencia Sectorial podrán revestir la forma de:**
- a) Directiva
 - b) Decreto
 - c) Recomendación
- 32. ¿Dónde se encuentra regulado el régimen de los convenios administrativos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?**
- a) En el Título Preliminar, Capítulo IV
 - b) En el Título Preliminar, Capítulo VI
 - c) En el Título VI
- 33. Señale la respuesta incorrecta. Según la regulación contenida en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:**
- a) La Administración está obligada a conceder ampliación de los plazos establecidos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero.
 - b) Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso.
 - c) Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate.
- 34. Conforme a lo dispuesto en el artículo 90.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resolución que ponga fin al procedimiento sancionador:**
- a) Será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa,
 - b) En dicha resolución no podrán adoptarse las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia.
 - c) Será inmediatamente ejecutiva cuando sea notificada en tiempo y forma.

35. De acuerdo con el art. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) El defecto de forma no determinará la anulabilidad del acto, aunque éste carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.
- b) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
- c) La anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

36. De acuerdo con el art. 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la lesividad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.
- b) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82.
- c) Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo los actos desfavorables para los interesados que sean anulables conforme a lo dispuesto en el artículo 48, previa su declaración de lesividad para el interés público.

37. Señale la respuesta correcta con relación a la suspensión de la ejecución de los actos administrativos.

- a) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
- b) Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser notificada individualmente a todas ellas.
- c) La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido dos meses desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien compete resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto.

38. De acuerdo con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado. A estos efectos, en la Administración Local ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de:

- a) Pleno, Alcaldes o Presidentes y Juntas de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración del Estado o de la comunidad autónoma, o cuando proceda recurso ante éstas en los supuestos del artículo 27.2.
- b) Autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa.
- c) Las dos anteriores son correctas.

39. Entre las novedades introducidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en materia de Administración electrónica, se encuentra:

- a) La comunicación por vía electrónica entre los interesados y las Administraciones se configura como un derecho y, en algunos casos, como una obligación.
- b) La presentación de documentos en el Registro electrónico solo en días hábiles, excluyéndose los sábados, los domingos y los declarados festivos.
- c) Se impone el formato electrónico del expediente administrativo, del que forma parte cualquier información que tenga carácter auxiliar o de apoyo.

40. Con independencia de que un interesado no esté obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas o de que no haya comunicado que se le practiquen notificaciones por medios electrónicos:

- a) Su comparecencia voluntaria o la de su representante en la sede electrónica o sede asociada de una Administración, y el posterior acceso al contenido de la notificación o el rechazo expreso de esta tendrá plenos efectos jurídicos.
- b) Sólo su comparecencia voluntaria y no la de su representante en la sede electrónica o sede asociada de una Administración, y el posterior acceso al contenido de la notificación o el rechazo expreso de esta tendrá plenos efectos jurídicos.
- c) Sólo su comparecencia voluntaria y no la de su representante a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, y el posterior acceso al contenido de la notificación o el rechazo expreso de esta tendrá plenos efectos jurídicos.

41. La certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS):

- a) Tiene una validez de un año, tras el cual debe realizarse una auditoría de renovación.
- b) Tiene una validez de dos años, tras los cuales debe realizarse una auditoría de renovación.
- c) Tiene una validez de tres años, tras los cuales debe realizarse una auditoría de renovación.

42. El conjunto de directrices que rigen la forma en que una organización gestiona y protege la información que trata y los servicios que presta se denomina:

- a) Política de protección de datos.
- b) Política de seguridad de la información.
- c) Política de gestión documental.

43. El Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica, define la interoperabilidad como:

- a) El instrumento que define la incorporación y gestión de los metadatos de contenido, contexto y estructura de los documentos electrónicos a lo largo de su ciclo de vida.
- b) El mecanismo, instalación, equipo o sistema que permite producir, almacenar o transmitir documentos, datos e informaciones; incluyendo cualesquiera redes de comunicación abiertas o restringidas como Internet, telefonía fija y móvil u otras
- c) La capacidad de los sistemas de información, y por ende de los procedimientos a los que éstos dan soporte, de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos.

44. Señale la respuesta correcta en relación a la interoperabilidad de los registros electrónicos:

- a) Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten en cualquiera de los registros.
- b) Las interconexiones entre Registros de las Administraciones Públicas deberán realizarse a través de la Plataforma de Intermediación de Datos (PID), de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en la correspondiente Norma Técnica.
- c) Las dos anteriores son correctas.

45. La digitalización de un documento para la generación de un documento electrónico atenderá a lo dispuesto en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico y estará compuesto por:

- a) La imagen electrónica que representará el aspecto y contenido del documento en el soporte origen, los metadatos complementarios para atender a necesidades de descripción específicas y, si procede, la firma de la imagen electrónica de acuerdo con la normativa aplicable.
- b) La imagen electrónica que representará el aspecto y contenido del documento en el soporte origen, los metadatos mínimos obligatorios definidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico y, si procede, la firma de la imagen electrónica de acuerdo con la normativa aplicable.
- c) La imagen electrónica que representará el aspecto y contenido del documento en el soporte origen, los metadatos mínimos obligatorios definidos en la Norma Técnica de Interoperabilidad de Documento Electrónico y, si procede, el índice electrónico que garantizará la integridad del documento electrónico y permitirá su recuperación.

46. Las copias electrónicas generadas que, por ser idénticas al documento electrónico original no comportan cambio de formato ni de contenido, tendrán la eficacia jurídica de:

- a) Documento electrónico compulsado.
- b) Documento electrónico certificado.
- c) Documento electrónico original.

47. La Plataforma de Intermediación de Datos:

- a) Permite que la Administración valide o consulte los datos necesarios en la tramitación del procedimiento, evitando al ciudadano aportar los documentos acreditativos o fotocopias pertinentes, permitiendo así hacer efectivo el derecho de los ciudadanos a no aportar documentos que hayan sido generados por cualquier Administración.
- b) Recoge los datos de aquellos funcionarios que están habilitados para actuar en nombre de los ciudadanos frente a la Administración General del Estado y establece el alcance de dicha representación.
- c) Permite a un usuario comprobar que el certificado utilizado es válido y no ha sido revocado, así como la validez de una firma electrónica realizada mediante certificado digital emitido por un prestador de servicios de certificación reconocido.

- 48. De acuerdo con el art. 52 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, el derecho de acceso de las personas interesadas que se relacionen electrónicamente con las Administraciones Públicas al expediente electrónico y, en su caso, a la obtención de copia total o parcial del mismo:**
- a) Se entenderá satisfecho mediante la puesta a disposición de dicho expediente en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente, o bien mediante la remisión de copia íntegra en formato papel de dicho expediente al interesado, a elección de este último.
 - b) Se entenderá satisfecho mediante la remisión de copia íntegra en formato papel de dicho expediente al interesado y previo pago de la tasa correspondiente.
 - c) Se entenderá satisfecho mediante la puesta a disposición de dicho expediente en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración competente o en la sede electrónica o sede electrónica asociada que corresponda.
- 49. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquiera de los siguientes sistemas:**
- a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico, por personal funcionario público habilitado y a través de la dirección electrónica habilitada única.
 - b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico y sistemas de clave concertada.
 - c) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica, sistemas de clave concertada y por personal funcionario público habilitado.
- 50. En el ámbito estatal, el plazo de disponibilidad para la verificación en la sede electrónica o sede electrónica asociada del código seguro de verificación aplicado a un documento será de:**
- a) Al menos de cinco años, salvo que en la normativa especial por razón de la materia se prevea un plazo superior.
 - b) Al menos de cinco años, salvo que en la normativa especial por razón de la materia se prevea un plazo inferior.
 - c) Al menos de tres años, salvo que en la normativa especial por razón de la materia se prevea un plazo superior.
- 51. De acuerdo con el art. 20 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, en la tramitación administrativa automatizada de los procedimientos, cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes sistemas de firma electrónica:**
- a) Sello electrónico de Administración Pública y certificado electrónico de empleado público.
 - b) Certificado electrónico de empleado público y sello de tiempo.
 - c) Sello electrónico de Administración Pública y código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública.

52. De acuerdo con el art. 29.2 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, el uso de la firma electrónica como medio de identificación electrónica del interesado ante las Administraciones Públicas:

- a) No excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónica los datos de identificación del interesado y, en su caso, del representante o la representante, que sean necesarios de acuerdo con la legislación que le sea aplicable.
- b) Excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónica los datos de identificación del interesado y, en su caso, del representante o la representante, que sean necesarios de acuerdo con la legislación que le sea aplicable.
- c) Excluye la obligación de incluir en el documento o comunicación electrónica los datos de identificación del interesado, pero no los del representante o la representante que sean necesarios de acuerdo con la legislación que le sea aplicable.

53. En el caso de actuaciones en nombre de persona jurídica, la capacidad de representación podrá acreditarse mediante certificado electrónico cualificado de representante. En este caso:

- a) El poder de representación abarca cualquier actuación ante cualquier Administración Pública.
- b) El poder de representación abarca cualquier actuación ante una Administración Pública concreta.
- c) La representación de las personas jurídicas no puede acreditarse mediante certificado electrónico cualificado de representante.

54. Señale la respuesta incorrecta, de acuerdo con el art. 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a) El apoderamiento «*apud acta*» se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en la Ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.
- b) Los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de diez años a contar desde la fecha de inscripción.
- c) Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos.

55. Las Administraciones Públicas prestarán la asistencia necesaria para facilitar el acceso de las personas interesadas a los servicios electrónicos proporcionados en su ámbito competencial a través de alguno o algunos de los siguientes canales:

- a) Presencial, a través de las oficinas de asistencia que se determinen; así como portales de internet y sedes electrónicas.
- b) Redes sociales, teléfono y correo electrónico.
- c) Las dos anteriores son correctas.

- 56. De acuerdo con el art. 39.3 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por Real Decreto 203/2021, cuando se presenten documentos originales o copias auténticas en soporte no electrónico, desde el momento en que sean digitalizados conforme a lo dispuesto en las correspondientes normas técnicas de interoperabilidad:**
- a) Tendrán la consideración de copia electrónica auténtica con cambio de formato.
 - b) Tendrán la consideración de copia electrónica auténtica de documento en soporte papel.
 - c) Tendrán la consideración de copia electrónica auténtica de un documento electrónico original.
- 57. De conformidad con el artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la inscripción en el Padrón municipal de los extranjeros no comunitarios sin autorización de residencia de larga duración está sujeta a renovación periódica cada dos años. La falta de renovación en dicho plazo:**
- a) Produce únicamente la pérdida de la antigüedad padronal, manteniéndose vigente la inscripción.
 - b) Obliga al Ayuntamiento a iniciar necesariamente un procedimiento contradictorio de baja de oficio.
 - c) Será causa para acordar la caducidad de la inscripción, sin necesidad de audiencia previa del interesado.
- 58. Según el artículo 16.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, los datos del Padrón municipal podrán cederse a otras Administraciones Públicas sin consentimiento previo del afectado:**
- a) Siempre que la Administración cesionaria invoque un interés público genérico.
 - b) Cuando sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias y exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean datos relevantes.
 - c) Únicamente cuando exista autorización judicial o previsión expresa en una ley orgánica.
- 59. De acuerdo con el artículo 17.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto de los documentos electrónicos almacenados en los archivos administrativos, señale la respuesta correcta:**
- a) Podrán conservarse en cualquier formato siempre que exista una copia en papel debidamente autenticada.
 - b) Deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión.
 - c) Deberán conservarse necesariamente en el mismo formato tecnológico en el que fueron generados originalmente.
- 60. Conforme al artículo 17.2 de la Ley 39/2015, las medidas de seguridad aplicables a los medios o soportes donde se almacenen documentos electrónicos deberán garantizar, entre otros extremos:**
- a) La imposibilidad absoluta de migración de formato durante toda la vida del documento.
 - b) El acceso exclusivamente por funcionarios pertenecientes al órgano productor del documento.
 - c) La identificación de los usuarios y el control de accesos, así como el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos.

- 61. Conforme al artículo 29.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras:**
- a) Se impondrán las sanciones correspondientes a cada una de las infracciones cometidas.
 - b) Se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.
 - c) Se impondrá la sanción correspondiente a la infracción principal y, adicionalmente, la sanción inferior en grado correspondiente a las restantes.
- 62. De acuerdo con el artículo 30.2 de la Ley 40/2015, el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse:**
- a) Desde el día en que la Administración tenga conocimiento de su comisión.
 - b) Desde el día en que la infracción se hubiera cometido, y en las infracciones continuadas o permanentes desde que finalizó la conducta infractora.
 - c) Desde el día siguiente a la incoación del procedimiento sancionador.
- 63. De conformidad con el artículo 34.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale la afirmación correcta respecto de los daños indemnizables en materia de responsabilidad patrimonial:**
- a) Serán indemnizables todos los daños efectivos, evaluables económicamente e individualizados, aun cuando el particular tenga el deber jurídico de soportarlos.
 - b) Solo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que este no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
 - c) Serán indemnizables exclusivamente los daños derivados del funcionamiento anormal de los servicios públicos, siempre que sean efectivos y evaluables económicamente.
- 64. Conforme al artículo 67.1 de la Ley 39/2015, cuando el daño producido tenga carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de un año para ejercer el derecho a reclamar responsabilidad patrimonial comenzará a computarse:**
- a) Desde la fecha en que se produjo el hecho causante, aunque las secuelas no estén determinadas.
 - b) Desde el alta hospitalaria, necesariamente.
 - c) Desde la curación o desde la determinación del alcance de las secuelas.
- 65. De conformidad con el artículo 52.4 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa, en el procedimiento de urgente ocupación, a la vista del acta previa a la ocupación y de los documentos que obren o se aporten al expediente, la Administración:**
- a) Formulará directamente la hoja de aprecio de la Administración, que servirá de base para la determinación definitiva del justiprecio.
 - b) Formulará, dentro del plazo que se fije al efecto, las hojas de depósito previo a la ocupación.
 - c) Determinará provisionalmente el justiprecio, que deberá ser abonado antes de proceder a la ocupación del bien.

66. Conforme al artículo 54.2 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre Expropiación Forzosa, no habrá derecho de reversión, entre otros supuestos, cuando:

- a) La Administración modifique parcialmente el proyecto de obra pública.
- b) Simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin declarado de utilidad pública o interés social.
- c) Hayan transcurrido más de cinco años desde el pago del justiprecio.

67. De conformidad con el artículo 13.1 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, tendrán la consideración de suelo urbano, entre otros, los terrenos que:

- a) Se encuentren incluidos en un ámbito de transformación urbanística previsto por el instrumento de ordenación, aunque no estén integrados en la malla urbana.
- b) Estén transformados urbanísticamente por contar con acceso rodado por vía urbana y conexión en red con los servicios básicos de abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica.
- c) Dispongan de acceso rodado y abastecimiento de agua, aunque carezcan de conexión a la red de saneamiento y suministro eléctrico.

68. De conformidad con el artículo 14.1 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía, el suelo rústico común comprende:

- a) Los terrenos cuya transformación mediante la urbanización resulte incompatible con los fines y objetivos de los instrumentos de ordenación territorial o urbanística.
- b) Los terrenos afectados por procesos naturales o actividades antrópicas susceptibles de generar riesgos mientras subsistan dichos procesos o actividades.
- c) El resto del suelo rústico del término municipal.

69. De conformidad con el artículo 22.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, podrán concederse directamente, entre otras:

- a) Todas las subvenciones cuyo importe individual sea inferior a 15.000 euros.
- b) Las que conceda una entidad local cuando no exista pluralidad de posibles beneficiarios.
- c) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, en los términos establecidos en los convenios y en la normativa reguladora.

70. De conformidad con el artículo 37.1.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente cuando concurra:

- a) El cumplimiento defectuoso de la actividad subvencionada, siempre que exista culpabilidad del beneficiario.
- b) El incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención.
- c) Cualquier modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión, aunque no afecte al cumplimiento de su finalidad.

- 71. De conformidad con el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el recurso contencioso-administrativo será admisible respecto de los actos de trámite cuando estos:**
- a) Pongan fin a la vía administrativa o hayan sido dictados por un órgano que carezca de superior jerárquico.
 - b) Produzcan efectos desfavorables para el interesado, aunque permitan continuar normalmente la tramitación del procedimiento.
 - c) Decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
- 72. De conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cuando el acto que ponga fin a la vía administrativa sea expreso, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo será de:**
- a) Dos meses contados desde la fecha en que se dicte el acto, con independencia de su notificación.
 - b) Dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto.
 - c) Seis meses contados desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.
- 73. De acuerdo con el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de datos personales será lícito cuando:**
- a) Sea necesario para cualquier actuación administrativa aunque la competencia no esté atribuida normativamente.
 - b) Sea necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.
 - c) Exista siempre consentimiento expreso del interesado, sin excepción.
- 74. Conforme al artículo 18.1 del Reglamento (UE) 2016/679, el interesado tendrá derecho a obtener la limitación del tratamiento, entre otros supuestos:**
- a) Siempre que haya ejercitado simultáneamente el derecho de supresión.
 - b) Cuando impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que permita al responsable verificar su exactitud.
 - c) Únicamente cuando exista resolución de la autoridad de control.
- 75. De conformidad con el artículo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el expediente deberá justificarse adecuadamente:**
- a) La duración inicialmente prevista del contrato y las eventuales prórrogas, con independencia de su incidencia en el valor estimado.
 - b) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.
 - c) La conveniencia económica de la contratación frente a otras formas de gestión del servicio.

- 76. Conforme a lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato:**
- a) Cuando considere conveniente la adjudicación conjunta de las prestaciones, sin necesidad de motivación expresa.
 - b) Cuando la división en lotes suponga un incremento del valor estimado del contrato, aunque no se justifique en el expediente.
 - c) Cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras.
- a) Únicamente medidas dirigidas a reducir efectivos mediante jubilación anticipada.
- 77. De acuerdo con el artículo 70.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante incorporación de personal de nuevo ingreso:**
- a) Podrán incluirse discrecionalmente en la oferta de empleo público.
 - b) Serán objeto de la oferta de empleo público o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal.
 - c) Deberán cubrirse necesariamente mediante personal funcionario interino antes de su inclusión en la oferta.
- 78. Según el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, quien viva en varios municipios deberá inscribirse en el Padrón:**
- a) De cualquiera de ellos, a su elección, con independencia del tiempo de residencia.
 - b) Únicamente de aquel en el que habite durante más tiempo al año.
 - c) De todos aquellos en los que resida durante más de tres meses al año.
- 79. Conforme al artículo 16.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las certificaciones expedidas sobre los datos del Padrón municipal tienen carácter de:**
- a) Documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.
 - b) Documento meramente informativo, sin valor probatorio de la residencia.
 - c) Documento público únicamente a efectos electorales.
- 80. Según el artículo 23.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en los municipios de régimen común, ¿cuál es el límite máximo de concejales que pueden integrar la Junta de Gobierno Local, además del alcalde?**
- a) La mitad del número legal de concejales.
 - b) La cuarta parte del número legal de concejales.
 - c) El tercio del número legal de concejales.
- 81. Según el artículo 46.2.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en un municipio de régimen común de 15.000 habitantes, el Pleno debe celebrar sesión ordinaria, como mínimo:**
- a) Cada mes.
 - b) Cada dos meses.
 - c) Cada tres meses.

- 82. Según el artículo 196.b) de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, será proclamado electo el candidato a alcalde que obtenga:**
- a) La mayoría absoluta de los votos de los concejales.
 - b) La mayoría simple de los votos de los concejales presentes.
 - c) Las dos terceras partes de los votos de los concejales.
- 83. Según el artículo 23.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los tenientes de alcalde sustituyen al alcalde en los casos de vacante, ausencia o enfermedad:**
- a) Por orden de mayor a menor edad.
 - b) Por el orden de los resultados electorales de sus respectivas candidaturas.
 - c) Por el orden de su nombramiento.
- 84. De acuerdo con el artículo 85.2.A) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, constituye una forma de gestión directa de los servicios públicos locales:**
- a) La concesión de servicios a una empresa privada.
 - b) La gestión mediante un organismo autónomo local.
 - c) La gestión mediante una sociedad mercantil de capital íntegramente privado.
- 85. Conforme al artículo 15.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el derecho de explotación de los servicios en un contrato de concesión de servicios implica:**
- a) La transferencia al concesionario del riesgo operacional.
 - b) La asunción íntegra del riesgo operacional por la Administración concedente.
 - c) La garantía de recuperación de todas las inversiones del concesionario, con independencia de las condiciones de explotación.
- 86. Según el artículo 141.1 de la Constitución Española, cualquier alteración de los límites provinciales debe ser aprobada:**
- a) Por el Gobierno de la Nación mediante real decreto.
 - b) Por la asamblea legislativa de la comunidad autónoma mediante ley ordinaria.
 - c) Por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
- 87. Conforme al artículo 36.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la diputación o entidad equivalente garantizará, en todo caso, los servicios de secretaría e intervención en los municipios:**
- a) De menos de 5.000 habitantes.
 - b) De menos de 1.000 habitantes.
 - c) De menos de 20.000 habitantes.
- 88. Según el artículo 195.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, si no se ha presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos, la corporación municipal se constituye en sesión pública:**
- a) El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones.

- b) El trigésimo día posterior a la celebración de las elecciones.
 - c) El cuadragésimo día posterior a la celebración de las elecciones.
- 89. De acuerdo con el artículo 191.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en las elecciones municipales, las operaciones del escrutinio general corresponden a:**
- a) Las juntas electorales provinciales.
 - b) La Junta Electoral Central.
 - c) Las juntas electorales de zona.
- 90. Según el artículo 65.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el requerimiento de anulación de un acuerdo local que se considere contrario al ordenamiento jurídico debe formularse, desde la recepción de la comunicación del acuerdo, en el plazo de:**
- a) Diez días hábiles.
 - b) Quince días hábiles.
 - c) Un mes.
- 91. Conforme al artículo 65.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, cuando la Administración del Estado o de una comunidad autónoma considere, en el ámbito de sus respectivas competencias, que un acto o acuerdo local infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerir a la entidad local para que lo anule en el plazo máximo de:**
- a) Un mes.
 - b) Quince días hábiles.
 - c) Dos meses.
- 92. Según el artículo 79.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, tienen la consideración de bienes comunales aquellos cuyo aprovechamiento corresponde:**
- a) Exclusivamente a los servicios municipales.
 - b) A cualquier persona, con independencia de su condición de vecino.
 - c) Al común de los vecinos.
- 93. Conforme al artículo 80.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, los bienes comunales y los demás bienes de dominio público son:**
- a) Inalienables e inembargables, pero pueden adquirirse por prescripción.
 - b) Inalienables, inembargables e imprescriptibles.
 - c) Inalienables e imprescriptibles, pero pueden ser embargados.
- 94. De acuerdo con el artículo 82.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las entidades locales pueden recuperar por sí mismas la posesión de sus bienes de dominio público:**
- a) En cualquier momento.
 - b) Únicamente durante el año siguiente a la pérdida de la posesión.
 - c) Únicamente durante los cuatro años siguientes a la pérdida de la posesión.

- 95. De acuerdo con el artículo 51 de la Ley 7/1999, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, ¿qué obligación general recae sobre las entidades locales en relación con sus bienes y derechos?**
- a) Enajenarlos preferentemente para obtener ingresos presupuestarios extraordinarios.
 - b) Cederlos de forma gratuita entidades privadas de interés social.
 - c) Defenderlos, conservarlos y administrarlos diligentemente.
- 96. Conforme al artículo 184.1 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, ¿cuál es el orden de las fases de gestión del presupuesto de gastos?**
- a) Autorización, reconocimiento de la obligación, disposición y ordenación del pago.
 - b) Autorización, disposición o compromiso, reconocimiento o liquidación de la obligación y ordenación del pago.
 - c) Disposición o compromiso, autorización, ordenación del pago y reconocimiento de la obligación.
- 97. Conforme a la atribución establecida en el artículo 185.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y sin perjuicio de su posible delegación o desconcentración, el reconocimiento y liquidación de las obligaciones derivadas de compromisos de gastos legalmente adquiridos corresponde:**
- a) Al presidente de la corporación.
 - b) Al interventor de la entidad local.
 - c) Al tesorero de la entidad local.
- 98. Conforme al artículo 3.4 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, salvo que exista una recepción o remisión expresa, los usos y costumbres se aplican:**
- a) Con preferencia a las disposiciones contractuales.
 - b) Con preferencia a los convenios colectivos.
 - c) En defecto de disposiciones legales, convencionales o contractuales.
- 99. Según el artículo 3.5 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, ¿cuándo pueden los trabajadores disponer válidamente de los derechos reconocidos por disposiciones legales de derecho necesario?**
- a) Después de adquirirlos, mediante renuncia escrita.
 - b) Ni antes ni después de su adquisición.
 - c) Siempre que reciban una compensación económica.
- 100. Conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye:**
- a) Discriminación directa por razón de sexo.
 - b) Discriminación indirecta por razón de sexo.
 - c) Discriminación únicamente cuando exista intención expresa de perjudicar.

PREGUNTAS DE RESERVA

101. Es una figura tributaria una:

- a) Subvención
- b) Operación de crédito
- c) Tasa

102. Según el artículo 95.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la caducidad:

- a) No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.
- b) Producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
- c) No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

103. No corresponde a las Oficinas de asistencia en materia de registros:

- a) La práctica de notificaciones, en el ámbito de actuación de esa Oficina, cuando el interesado o su representante comparezcan de forma espontánea en la Oficina y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
- b) La identificación o firma electrónica del interesado, cuando se trate de una persona no obligada a la relación electrónica con la Administración, en los procedimientos administrativos para los que se haya previsto habilitación.
- c) Facilitar la obtención de certificaciones administrativas exigidas por la normativa correspondiente.

104. Conforme a lo establecido en el artículo 38.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para que los Acuerdos que versen sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas sean válidos y eficaces:

- a) Será suficiente su aprobación por los representantes de la Administración y las organizaciones sindicales en la correspondiente Mesa de Negociación.
- b) Será necesaria su ratificación por el órgano administrativo competente en materia de personal, sin que resulte exigible la intervención del órgano de gobierno.
- c) Será necesaria su aprobación expresa y formal por los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas.

105. Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo se consideran:

- a) Válidos mientras no se acredite un perjuicio económico.
- b) Anulables y susceptibles de convalidación por quien los haya realizado.
- c) Nulos y sin efecto.